



Instrumentos internacionales de Derechos Humanos

Distr.
GENERAL

HRI/CORE/1/Add.7
3 de junio de 1992

Original: ESPAÑOL

DOCUMENTO BASICO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LOS
INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

ECUADOR

[17 de mayo de 1992]

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. TERRITORIO Y POBLACION	1	1
II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL	2 - 50	1
A. Historia y antecedentes políticos	2 - 15	1
B. Régimen de Gobierno	16	4
C. Función ejecutiva	17 - 28	4
1. Del Presidente de la República	17 - 23	4
2. Del Vicepresidente de la República	24 - 25	7
3. De los Ministros Secretarios de Estado	26 - 28	8
D. Función legislativa	29 - 37	8
E. Función jurisdiccional	38 - 50	11
1. Principios básicos	38 - 41	11
2. De los órganos de la función	42	11
3. De la organización de funcionamiento	43 - 50	12

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	51 - 76	13
A. Autoridades judiciales, administrativas o de otra índole competentes en materias relativas a los derechos humanos	51 - 52	13
1. Organizaciones gubernamentales	51	13
2. Organizaciones no gubernamentales	52	13
B. Recursos de que dispone un individuo que afirma que se han violado sus derechos y sistemas de indemnización y rehabilitación	53 - 66	15
1. Recursos en la Constitución Política vigente	53	15
2. Recursos en la legislación procesal penal ...	54 - 60	16
3. Sistemas de indemnización	61 - 66	19
C. Protección de los derechos contemplados en los diversos instrumentos de derechos humanos	67 - 69	20
D. Forma en que los instrumentos de derechos humanos pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional	70 - 73	21
E. Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos ¿pueden ser invocadas ante los tribunales judiciales o las autoridades administrativas, o ser aplicadas directamente por ellos o deben transformarse en derecho interno o en reglamentaciones administrativas antes de que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes?	74	22
F. Institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos ...	75 - 76	22
IV. INFORMACION Y PUBLICIDAD	77 - 81	22
<u>Anexo:</u> Lista de fuentes de información		24

I. TERRITORIO Y POBLACION

"Esta sección debería contener información sobre las principales características étnicas y demográficas del país y de su población, a la vez que indicadores socioeconómicos y culturales tales como el ingreso per capita, el producto nacional bruto, la tasa de inflación, la deuda externa, la tasa de desempleo, la tasa de alfabetización y la religión. Debería incluir asimismo información relativa a la lengua materna, la esperanza de vida, la mortalidad infantil y materna, la tasa de fecundidad, el porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65, el porcentaje de población que vive en zonas rurales y urbanas y el porcentaje de jefes de familia que son mujeres. En la medida de lo posible, los Estados deberían esforzarse en suministrar todos los datos desglosados por sexo." (Directrices consolidadas para la parte inicial de los informes de los Estados Partes; HRI/CORE/1, anexo.)

1. En relación con este punto, se adjuntan los siguientes documentos*:
 - V Censo de Población y IV de Vivienda, 1990. Resultados definitivos, publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
 - Ecuador. Datos e indicadores básicos, 1991. Publicación del Consejo Nacional del Desarrollo (CONADE), con el auspicio de la Fundación Haans Seidel.
 - Indicadores económicos globales. CONADE. Informativo para consulta y divulgación, 1990.
 - Indicadores sociales. CONADE. Informativo para consulta y divulgación, 1990.
 - Información sobre indicadores económicos y sociales. Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL

"En esta sección deberían describirse brevemente la historia y los antecedentes políticos del país, su régimen de Gobierno y la estructura del poder ejecutivo, legislativo y judicial." (Directrices consolidadas...; HRI/CORE/1, anexo.)

A. Historia y antecedentes políticos

2. Existen evidencias de que el territorio que actualmente corresponde al Ecuador estuvo habitado 10.000 años a. de C. En el Ecuador se desarrolló la cultura Valdivia que introdujo el cultivo del maíz y trabajó un tipo de cerámica sumamente fino, con énfasis en las figuras femeninas relacionadas con el culto a la fertilidad. Durante los siglos siguientes se desarrollaron

* Esos documentos presentados por el Gobierno del Ecuador en español, pueden ser consultados en el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

importantes culturas que alcanzaron un alto nivel de civilización y llegaron a constituirse en confederaciones y reinos localizados en distintos puntos del territorio ecuatoriano. Alrededor de trescientos años antes de la incursión inca se había formado la Confederación Shyri-Puruhá que ejercía influencia en la región centro-norte, en tanto que al sur, la Confederación Cañari controlaba el territorio de las actuales provincias de Cañar y Azuay.

3. En 1478, el inca Túpac Yupanqui inició la conquista de esas tierras. Se enfrentó a los cañaris a quienes sometió, estableciéndose luego en Tomebamba. Después de casi treinta años de lucha, el inca Huayna Cápac logró derrocar a la Confederación Shyri-Puruhá en la batalla de Yahuarcocha. En pocos años, la región norte del Tahuantinsuyo, cuyo centro fue Quito, adquirió gran importancia. La ciudad fue escogida para establecer la segunda capital del Imperio.

4. Luego de la muerte de Huayna Cápac, la rivalidad y las guerras por la sucesión del trono entre el quiteño Atahualpa y el cuzqueño Huáscar debilitaron el poderío incásico, a tal punto que un pequeño grupo de 200 aventureros comandados por Francisco Pizarro logró someter esa civilización de elevada cultura y que, según diversos cálculos, contaba para entonces con alrededor de diez millones de habitantes. La conquista produjo la destrucción de las civilizaciones indígenas y diezmó la población. Los sobrevivientes fueron explotados bajo el régimen de "encomiendas, mitas y obrajes", instituciones expoliadoras del trabajo de los indios, quienes fueron reducidos a una condición similar a la esclavitud.

5. Durante la época colonial, Quito fue la capital de la Real Audiencia del mismo nombre creada en 1563, además de núcleo artístico y cultural, pues fue sede universitaria y centro de creación de la Escuela Quiteña, la cual junto con las de Cuzco y México, entre otras, fueron las generadoras de las máximas expresiones del arte colonial hispanoamericano.

6. Las guerras por la independencia comenzaron a principios del siglo XIX. Aunque el movimiento se había fraguado con anterioridad, la influencia de hechos como la revolución francesa, la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica, la invasión francesa a España y el surgimiento de la ideología liberal, desembocaron en la lucha abierta contra el dominio español. El 10 de agosto de 1809, en la ciudad de Quito, se dio el grito de independencia, movimiento sofocado luego de varios meses por la tropas españolas. La victoria final se la obtuvo en la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822.

7. Al iniciar su vida independiente, el país se vinculó políticamente a la Gran Colombia, conformada por las actuales Repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Su separación se produjo el 13 de mayo de 1830. La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por los enfrentamientos entre facciones rivales, el auge del militarismo, la creciente inestabilidad política y el escaso desarrollo económico del país. A partir de 1860, se produjo un notable incremento en la exportación de productos tradicionales como el café y, especialmente, el cacao que revolucionaron la economía del país y favorecieron el fortalecimiento de la burguesía agroexportadora de tendencia liberal. Surgieron así serias pugnas entre los exportadores costeros y los

terratenientes serranos, de tendencia mayoritariamente conservadora. El Gobierno de Gabriel García Moreno significó el apogeo de la ideología conservadora y trajo gran progreso material al país, aunque a costa de una total privación de las libertades ciudadanas.

8. En 1895 la Revolución Liberal, comandada por el general Eloy Alfaro, reactivó las esperanzas del pueblo hacia cambios trascendentales. Se emprendieron grandes obras: el ferrocarril, iniciado por García Moreno, fue terminado; se implantó la educación laica; y el crecimiento de las exportaciones permitió el desarrollo económico. La prosperidad, sin embargo, no se tradujo en un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Entre las reformas importantes cabe destacar la reducción del poder de la Iglesia católica, la expropiación de sus grandes propiedades, la modernización e integración de la economía y la apertura del país a los mercados externos.

9. En 1941, el país hizo frente a la agresión armada del Perú, como consecuencia de lo cual perdió casi un 50% de su territorio. En esas condiciones, el 29 de enero de 1942 se suscribió el Protocolo de Río de Janeiro. El 28 de mayo de 1944 una rebelión popular, a nivel nacional, acabó con el Gobierno de Alberto Arroyo del Río. El Dr. José María Velasco Ibarra fue proclamado Presidente.

10. Entre 1948 y 1960 el país tuvo un período democrático en el que se sucedieron tres Gobiernos. Esta etapa se caracterizó por la relativa prosperidad económica alcanzada, en especial, por un importante incremento de las exportaciones de banano. En la década de los 60 se produce la reforma agraria.

11. El año 1972 marca el inicio de una nueva era. El Ecuador empieza a exportar petróleo y éste se transforma en el primer rubro de ingreso económico. Ese mismo año cambia la situación política. El líder José María Velasco Ibarra (cinco veces Presidente) es depuesto por las Fuerzas Armadas. El general Guillermo Rodríguez Lara fue sustituido, en febrero de 1976, por un Consejo Supremo de Gobierno.

12. Se instrumentó, entonces, el proceso de retorno al régimen civil, cuyo primer paso fue la realización de un referéndum para adoptar una nueva Constitución. El 16 de junio de 1978, el candidato del partido "Concentración de Fuerzas Populares", abogado Jaime Roldós Aguilera, recibió mayoría de votos en las elecciones presidenciales. Su designación fue ratificada en una segunda vuelta electoral.

13. En 1981 se produjeron enfrentamientos armados entre tropas ecuatorianas y peruanas en la Cordillera del Cóndor. El Presidente Roldós falleció en un accidente de aviación y le sustituyó en el poder el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea, hasta ese momento Vicepresidente de la República. En 1983 el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones presidenciales para el año siguiente, en las que se declaró el triunfo del candidato socialcristiano, Ing. León Febres Cordero.

14. En 1988 asumió la Presidencia el socialdemócrata Rodrigo Borja. En la actualidad, el país vive un proceso de vigencia de la democracia, caracterizado por el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un nuevo proceso electoral se realizará en 1992.

15. Sobre este punto se adjuntan dos publicaciones: "Visión del Ecuador" de Luis Valencia Rodríguez, 1992 y "Ecuador" de la editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1982.

B. Régimen de gobierno

16. La actual Constitución política, en su artículo 1° sostiene:

"El Ecuador es un Estado soberano, independiente, democrático y unitario. Su Gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable y alternativo.

La soberanía radica en el pueblo, que la ejerce por los órganos del poder público.

El idioma oficial es el castellano. El quichua y las demás lenguas aborígenes forman parte de la cultura nacional..."

C. Función ejecutiva

1. Del Presidente de la República

17. La función ejecutiva es ejercida por el Presidente de la República, quien representa al Estado. El mandato dura un período de 4 años y no podrá ser reelegido. Para Presidente de la República se requiere ser ecuatoriano por nacimiento; estar en goce de los derechos de la ciudadanía; tener 35 años de edad, por lo menos, al momento de la elección; estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente; y, elegido por mayoría absoluta de sufragios, en votación directa, universal y secreta, conforme a la ley.

18. El Presidente de la República cesa definitivamente en sus funciones y deja vacante el cargo: a) por terminación del período para el cual fue elegido; b) por muerte; c) por renuncia aceptada por el Congreso Nacional; d) por incapacidad física o mental declarada por el Congreso Nacional; y e) por destitución o abandono del cargo, declarado por el Congreso Nacional.

19. En caso de falta temporal o definitiva del Presidente de la República, le subrogarán: a) el Vicepresidente de la República; b) el Presidente del Congreso Nacional; o c) el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

20. Son casos de falta temporal del Presidente de la República:
a) la enfermedad que le impida transitoriamente ejercer su función;
y b) la licencia.

21. El Presidente de la República, durante el desempeño de sus funciones, no podrá ausentarse del país sin autorización del Congreso Nacional o en receso de éste, del Tribunal de Garantías Constitucionales. No podrá ausentarse de Quito, sede del Gobierno, por más de 30 días consecutivos. Cualquier actitud contraria a estos preceptos se considerará como abandono del cargo. Tampoco podrá ausentarse del país durante el año inmediatamente posterior a la cesación de sus funciones, sin previa autorización del Congreso Nacional o del Tribunal de Garantías Constitucionales, en su caso.

22. Son atribuciones y deberes del Presidente de la República:

- a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, decretos y convenciones internacionales.
- b) Sancionar, promulgar, ejecutar u objetar las leyes que expida el Congreso Nacional o el Plenario de las Comisiones Legislativas.
- c) Dictar, dentro de un plazo de noventa días, los reglamentos para la aplicación de las leyes que no puede interpretarlas ni alterarlas. Si el Presidente de la República considerase que el plazo indicado es insuficiente, podrá dirigir al Congreso Nacional o al Plenario de las Comisiones Legislativas, la exposición de motivos que le permitan utilizar hasta noventa días adicionales, para el cumplimiento de esta disposición.
- d) Mantener el orden interior, cuidar de la seguridad exterior del Estado y determinar la política de seguridad nacional.
- e) Nombrar y remover libremente a los ministros, jefes de misiones diplomáticas, gobernadores y demás funcionarios públicos que le corresponda hacerlo, de acuerdo con la ley y el estatuto jurídico administrativo dictado por el Presidente de la República.
- f) Determinar la política exterior y dirigir las relaciones internacionales, celebrar tratados y demás convenios internacionales de conformidad con la Constitución y leyes; ratificarlos previa aprobación del Congreso Nacional; canjear o depositar, en su caso, las respectivas cartas de ratificación.
- g) Contratar y autorizar la contratación de empréstitos, de acuerdo con la ley.
- h) Ejercer la máxima autoridad de la Fuerza Pública.
- i) Otorgar el grado militar y policial y los ascensos jerárquicos a los oficiales de la fuerza pública, de acuerdo con la ley.
- j) Decretar la movilización, la desmovilización y las requisiciones que sean necesarias de acuerdo con la ley.
- k) Disponer el empleo de la fuerza pública, a través de los organismos correspondientes, cuando la seguridad y el servicio público lo demanden.
- l) Nombrar y remover a los funcionarios de la fuerza pública, con sujeción a la ley.
- m) Asumir la dirección política de la guerra.
- n) Aprobar, de acuerdo con la ley y en forma reservada, los orgánicos de la fuerza pública; en tiempo de paz y en caso de emergencia, llamar a toda o parte de la reserva al servicio activo.

- o) Declarar el estado de emergencia nacional y asumir las siguientes atribuciones o algunas de ellas, en caso de inminente agresión externa, de guerra internacional o de grave conmoción o catástrofe interna, notificando al Congreso Nacional, si estuviere reunido, o al Tribunal de Garantías Constitucionales:
- i) decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones;
 - ii) en caso de conflicto internacional, inminente invasión o catástrofe interna, invertir para defensa del Estado o solución de la catástrofe, los fondos fiscales destinados a otros objetos, excepto los correspondientes a sanidad y asistencia social;
 - iii) trasladar la sede del Gobierno a cualquier punto del territorio nacional;
 - iv) cerrar o habilitar puertos temporalmente;
 - v) establecer censura previa en los medios de comunicación social;
 - vi) suspender la vigencia de las garantías constitucionales; pero en ningún caso puede decretar la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la vida y la integridad personal; o, la expatriación de un ecuatoriano, ni disponer el confinamiento fuera de las capitales de provincia ni a distinta región de la que viviere el afectado; y,
 - vii) declarar zona de seguridad el territorio nacional, con sujeción a la ley.

El Congreso Nacional o el Tribunal de Garantías Constitucionales, en receso de aquél, puede revocar la declaratoria, si las circunstancias lo justificaren.

- p) Dar por terminada la declaratoria de emergencia cuando hayan desaparecido las causas que la motivaron y notificar en tal sentido al Congreso Nacional o al Tribunal de Garantías Constitucionales, en su caso, sin perjuicio del informe que debe rendir ante el organismo correspondiente.
- q) Presentar al Congreso Nacional un informe anual de sus labores y del estado general de la República, que lo leerá el 10 de agosto de cada año.
- r) Convocar y someter a consulta popular las cuestiones que a su juicio sean de trascendental importancia para el Estado y, especialmente, los proyectos de reforma a la Constitución, en los casos previstos en el artículo 143, y la aprobación y ratificación de tratados o acuerdos internacionales que, en su caso, hayan sido rechazados por el Congreso Nacional o por el Plenario de las Comisiones Legislativas o por el propio Presidente de la República; y,

- s) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su alta magistratura, que le confieran la Constitución y las leyes.

23. No podrá ser elegido Presidente de la República:

- a) quien haya ejercido la Presidencia de la República como titular o por subrogación definitiva;
- b) quien haya ejercido el gobierno de facto;
- c) quien fuere cónyuge o pariente del Presidente de la República en ejercicio, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- d) quien haya ejercido la Vicepresidencia de la República como titular o por subrogación definitiva, en el período inmediatamente anterior a la elección;
- e) quien sea Ministro Secretario de Estado, al tiempo de la elección o seis meses antes de ésta;
- f) quien sea miembro activo de la fuerza pública o lo hubiere sido seis meses antes de la elección;
- g) quien sea ministro o religioso de cualquier culto;
- h) quien personalmente o como representante de personas jurídicas tenga contratos con el Estado; e
- i) los representantes legales y apoderados de compañías extranjeras.

2. Del Vicepresidente de la República

24. Habrá un Vicepresidente de la República, elegido simultáneamente con el Presidente, en la misma papeleta y por mayoría absoluta de sufragios, en votación directa, universal y secreta, de acuerdo con la ley. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas condiciones que para el Presidente de la República. El período es de cuatro años y no podrá ser reelegido. El Vicepresidente, cuando no ejerza la Presidencia de la República, es Presidente nato del Consejo Nacional de Desarrollo.

25. En caso de falta temporal del Vicepresidente, le subrogarán el Presidente del Congreso Nacional o el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Cuando la falta fuere definitiva, el Congreso Nacional procederá a elegir Vicepresidente con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros, por el tiempo que faltare para completar el correspondiente período presidencial establecido por esta Constitución. Las incompatibilidades establecidas para el Presidente de la República lo son también para el Vicepresidente, en cuanto sean aplicables.

3. De los Ministros Secretarios de Estado

26. El despacho de los negocios del Estado se halla a cargo de los Ministros, quienes son de libre nombramiento y remoción del Presidente, le representan en los asuntos atinentes al Ministerio a su cargo y responden por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de esa representación de acuerdo con la ley. El número y denominación de los Ministerios son determinados por el Presidente, en relación con las necesidades del Estado.

27. Para ser Ministro se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, estar en goce de los derechos de ciudadanía y tener 30 años de edad, por lo menos. Deja de ser Ministro quien ha sido censurado por el Congreso Nacional y no podrá ser designado para ninguna función pública dentro del mismo período presidencial.

28. Los Ministros presentarán anualmente ante el Presidente y para conocimiento del país, informes de las labores cumplidas y los planes o programas a ejecutarse en su dependencia. Estos informes serán enviados al Congreso Nacional.

D. Función legislativa

29. La función legislativa es ejercida por el Congreso Nacional con sede en Quito, integrado por 12 diputados elegidos por votación nacional; 2 diputados elegidos por cada provincia (política y administrativamente el Ecuador tiene 21 provincias), a excepción de las de menos de 100.000 habitantes que eligen uno; y además, por un diputado elegido por cada 300.000 habitantes o fracción que pase de 200.000. Los diputados son elegidos entre los candidatos presentados por los partidos políticos reconocidos legalmente, en listas que son calificadas por la función electoral, de acuerdo con la ley. La base de elección de 300.000 o fracción de 200.000 se aumenta en la misma proporción en que se incremente la población nacional, de acuerdo con los censos. Excepcionalmente, el Congreso se reunirá en cualquier otra ciudad.

30. Los diputados nacionales durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos después de un período legislativo. Deben ser ecuatorianos por nacimiento; gozar de los derechos de ciudadanía; estar afiliados a uno de los partidos políticos legalmente reconocidos y tener 30 años de edad, por lo menos, al momento de la elección. Los diputados provinciales durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos después de un período legislativo. Para ser elegido diputado provincial se requerirá: ser ecuatoriano por nacimiento; gozar de los derechos de ciudadanía; estar afiliado a uno de los partidos políticos legalmente reconocidos; tener 25 años de edad, por lo menos, al momento de la elección, y ser oriundo de la provincia respectiva o haber tenido su residencia principal de modo ininterrumpido en ella 3 años, por lo menos, inmediatamente anteriores a la elección.

31. No pueden ser miembros del Congreso Nacional:

- a) el Presidente y Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Contralor General, el Procurador General, el Ministro Fiscal General, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, los superintendentes de bancos y de compañías; y el Presidente del Consejo Superior y el Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

- b) los empleados públicos y, en general, los que perciban sueldos del erario nacional o los que hubieren percibido seis meses antes de la elección;
- c) los que ejerzan mando o jurisdicción o los hubieren ejercido dentro de seis meses anteriores a la elección;
- d) los presidentes, gerentes y representantes legales de los bancos y demás instituciones de crédito establecidos en el Ecuador, así como los de sus sucursales o agencias;
- e) los que por sí o por interpuesta persona tengan contratos con el Estado, sea como personas naturales o como representantes de personas jurídicas;
- f) los militares en servicio activo;
- g) los ministros de cualquier culto y los miembros de comunidades religiosas;
- h) los representantes legales y apoderados de compañías extranjeras; e
- i) los que se encuentran impedidos por otras disposiciones legales.

La dignidad del legislador no significa función o cargo público.

32. El Congreso Nacional se reúne en pleno, sin necesidad de convocatoria, en Quito, el 10 de agosto de cada año y sesiona durante 60 días improrrogables, para conocer exclusivamente de los siguientes asuntos:

- a) Nombrar de entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente del Congreso, quienes durarán un año en sus funciones.
- b) Posesionar al Presidente y al Vicepresidente de la República, proclamados electos por el Tribunal Supremo Electoral.
- c) Interpretar la Constitución.
- d) Expedir, modificar, reformar, derogar e interpretar las leyes, establecer o suprimir impuestos, tasas u otros ingresos públicos.
- e) Fiscalizar los actos de la función ejecutiva y demás órganos del Poder Público y conocer los informes que le sean presentados por sus titulares.
- f) Proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Ministros Secretarios de Estado; de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Fiscal; de los miembros del Tribunal Fiscal; de los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y de los del Tribunal Supremo Electoral; del Contralor General y del Procurador General del Estado, del Ministro Fiscal General y de los superintendentes de bancos y de compañías,

por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos; y resolver su censura en el caso de declaratoria de culpabilidad, lo que producirá como efecto su destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo período. El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados por traición a la patria, cohecho o cualquier otra infracción que afectare gravemente el honor nacional.

- g) Conocer y resolver sobre las excusas y renunciaciones del Presidente y del Vicepresidente de la República y de los Magistrados o miembros y funcionarios de cortes, tribunales y organismos, a que se refiere la letra anterior, a excepción de los ministros de Estado.
- h) Aprobar o desaprobado los tratados públicos y demás convenciones internacionales.
- i) Conceder o negar al Presidente y Vicepresidente de la República los permisos que le sea necesarios.
- j) Nombrar al Contralor General, al Procurador General, al Ministro Fiscal y a los superintendentes de bancos y de compañías, de las ternas que les sean enviadas por el Presidente de la República y removerlos, si fuere el caso.
- k) Conceder amnistía general por delitos políticos e indultos por delitos comunes, cuando lo justifique algún motivo trascendental; y,
- l) Los demás indicados en la Constitución y las leyes.

33. El Congreso Nacional constituirá cuatro comisiones legislativas integradas con siete diputados cada una. Estas comisiones se ocuparán respectivamente: a) de lo civil y penal; b) de lo laboral y social; c) de lo tributario, fiscal, bancario y de presupuesto; y, d) de lo económico, agrario, industrial y comercial. Las comisiones conocerán de materias afines y laborarán todo el año y a tiempo completo.

34. Adicionalmente, para facilitar la labor legislativa, se han establecido las siguientes Comisiones Especiales: de Asuntos Amazónicos y Fronterizos; de Asuntos Constitucionales; de Asuntos Internacionales; de Ciencia y Tecnología; de Codificación; de Cultura; de Defensa del Medio Ambiente; de Defensa del Usuario y el Consumidor; de Derechos Humanos; de Fiscalización; de la Mujer, el Niño y la Familia; de Modernización del Estado; y, de Racionalización Administrativa.

35. Es facultad privativa del plenario de las comisiones legislativas la codificación de las leyes. Para el cumplimiento de sus labores y de las comisiones legislativas, el Congreso dictará la Ley Orgánica de la función legislativa.

36. Los miembros del Congreso Nacional actuarán con sentido nacional y no podrán desempeñar ningún cargo público, a excepción de la docencia universitaria; ni ejercer su profesión durante el período de sesiones del Congreso Nacional y del plenario de las comisiones legislativas, en su caso.

Durante el desempeño de sus funciones gozarán de inmunidad parlamentaria, salvo en el caso de delito flagrante, que deberá ser calificado por el Congreso Nacional. Las comisiones legislativas serán renovadas, parcialmente, en los períodos y en la forma que señale la ley. Sus miembros pueden ser reelegidos.

37. El Congreso puede sesionar extraordinariamente, convocado por su Presidente, por el Presidente de la República o por las dos terceras partes de sus miembros, para conocer exclusivamente de los asuntos materia de la convocatoria.

E. Función jurisdiccional

1. Principios básicos

38. El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. No se sacrifica ésta por la sola omisión de formalidades. Las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites, adoptarán en lo posible, el sistema oral.

39. El retardo injustificado en la administración de justicia es reprimido por la ley y en caso de reincidencia, constituye motivo para la destitución del magistrado o juez quien, además, es responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas.

40. La administración de justicia es gratuita. La Corte Suprema de Justicia expedirá la reglamentación correspondiente. Los juicios son públicos, salvo los casos que la ley señale, pero los tribunales pueden deliberar en secreto. En ningún juicio hay más de tres instancias. Los organismos de la función jurisdiccional son independientes en el ejercicio de sus funciones. Ninguna autoridad puede interferir en los asuntos propios de aquélla.

41. Se establece la unidad jurisdiccional. Por consiguiente, todo acto administrativo generado por la administración central, provincial, municipal o de cualquier entidad autónoma reconocida por la Constitución y las leyes, podrá ser impugnado ante los Tribunales Fiscal y de lo Contencioso Administrativo, en la forma que determine la ley. Se reconoce la carrera judicial, cuyas regulaciones las determinará la ley.

2. De los órganos de la función

42. Son órganos de la función jurisdiccional y se rigen por leyes específicas:

- a) la Corte Suprema de Justicia, las cortes superiores y los juzgados y tribunales dependientes de aquélla, conforme a la ley;
- b) el Tribunal Fiscal;
- c) el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y
- d) los demás tribunales y juzgados que las leyes establezcan.

3. De la organización de funcionamiento

43. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Fiscal y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tienen competencia en todo el territorio nacional y su sede en Quito. La ley determinará el número de magistrados que lo integren, así como la organización y funcionamiento de sus salas. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Fiscal y Tribunal de lo Contencioso Administrativo son responsables de los perjuicios que se causen a las partes por retardo, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. El Congreso Nacional o en su receso, el Plenario de las Comisiones Legislativas procederá a su enjuiciamiento político.

44. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Fiscal o de lo Contencioso Administrativo se requiere:

- a) ser ecuatoriano por nacimiento;
- b) hallarse en ejercicio de los derechos políticos;
- c) ser mayor de 40 años;
- d) tener título de doctor en jurisprudencia; y
- e) haber ejercido la profesión de abogado con probidad notoria, la judicatura o la cátedra universitaria en ciencia jurídica durante 15 años por lo menos, o reunir los requisitos de carrera judicial exigidos por la ley para esta designación.

45. Los Magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Fiscal, y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son elegidos por el Congreso Nacional, duran cuatro años en el ejercicio de sus cargos y pueden ser reelegidos. Sus atribuciones y las causas de su remoción están contempladas en la ley. Las vacantes de la Corte Suprema, Tribunal Fiscal y Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán llenadas interinamente por los respectivos tribunales y los magistrados así elegidos ejercen sus funciones hasta cuando el Congreso Nacional designe sus titulares.

46. La Corte Suprema de Justicia en pleno dicta en caso de fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho, la norma dirimente, la que en el futuro tendrá carácter obligatorio, mientras la ley no determine lo contrario. Para el efecto, los Ministros Jueces y el Ministro Fiscal son inmediatamente convocados después de ocurrida la discrepancia, para dictar la resolución, a más tardar, dentro de quince días de formulada la convocatoria. Igual facultad y plazo tendrán el Tribunal Fiscal y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en sus respectivos plenarios, para los asuntos que corresponden a su competencia.

47. La ley determina la organización de las cortes superiores y demás tribunales y juzgados. Los magistrados, jueces y fiscales no pueden ejercer la abogacía ni desempeñar otro cargo público o privado, con excepción de la cátedra universitaria. Tampoco pueden ejercer funciones directivas en los partidos políticos, ni intervenir en contiendas electorales. Dentro de la respectiva circunscripción territorial, la competencia de los jueces civiles,

penales, del trabajo e inquilinato y demás jueces especiales, en toda controversia judicial, se radica mediante sorteo diario, por lo menos, que se realiza de acuerdo con el reglamento que dictará la Corte Suprema. Se exceptúa de esta disposición la radicación de la competencia de los jueces de instrucción penal.

48. Por medio de sus magistrados, la Corte Suprema, el Tribunal Fiscal y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueden concurrir al Congreso Nacional o a las comisiones legislativas para intervenir, sin derecho a voto, en la discusión de proyectos de leyes.

49. El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores y de toda persona que no dispusiere de medios económicos.

50. Los Presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal Fiscal y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, informarán anualmente por escrito, al Congreso Nacional sobre sus labores y programas.

III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Autoridades judiciales, administrativas o de otra índole competentes en materias relativas a los derechos humanos

1. Organizaciones gubernamentales

51. Las principales autoridades judiciales o administrativas competentes en materias relativas a derechos humanos, entre otras, son las siguientes:

- a) Comisión de Asuntos Indígenas (Presidencia de la República);
- b) Comisión de Derechos Humanos (Congreso Nacional);
- c) Comisión Especial de Derechos Humanos (Tribunal de Garantías Constitucionales);
- d) Dirección General de Derechos Humanos y Refugiados (Ministerio de Relaciones Exteriores);
- e) Subsecretaría de Justicia (Ministerio de Gobierno y Policía).

2. Organizaciones no gubernamentales

52. A continuación se indican las 38 principales organizaciones no gubernamentales competentes en materias relativas a los derechos humanos:

- a) Amnistía Internacional (AI), Sección Ecuador;
- b) Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), sede Ecuador;
- c) Comisión de Amparo de los Derechos Humanos de la Universidad Católica de Guayaquil;

- d) Comisión de Cultura y Derechos Humanos, Universidad Católica de Guayaquil;
- e) Comisión de Derechos Humanos de Chone;
- f) Comisión de Derechos Humanos de Esmeraldas;
- g) Comisión de Derechos Humanos de Imbabura;
- h) Comisión de Derechos Humanos de Loja;
- i) Comisión de Derechos Humanos de Macas;
- j) Comisión de Derechos Humanos del Azuay;
- k) Comisión de Derechos Humanos del Cañar;
- l) Comisión Diocesana de Derechos Humanos (Machala-El Oro);
- m) Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos;
- n) Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz, Sección Ecuador;
- o) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU);
- p) Comisión Internacional de Juristas, Capítulo Ecuador;
- q) Comisión Nacional de Derechos Humanos;
- r) Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH);
- s) Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH);
- t) Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Loja;
- u) Comité de Derechos Humanos de Bolívar;
- v) Comité de Derechos Humanos de Tungurahua;
- w) Comité de Derechos Humanos del Nororiente;
- x) Comité de Derechos Humanos Mons. Romero (Los Ríos);
- y) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos;
- z) Comité por la Defensa de los Derechos Democráticos de los Trabajadores y del Pueblo;
- aa) Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENAIE);
- bb) Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE);

- cc) Conferencia Episcopal Ecuatoriana;
- dd) Confraternidad Carcelaria del Ecuador;
- ee) Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Sede Ecuador;
- ff) Delegación Diocesana de Derechos Humanos;
- gg) Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI);
- hh) Frente de Solidaridad de Chimborazo;
- ii) Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Humanos;
- jj) Instituto de Derechos Humanos, Universidad Central de Ecuador;
- kk) Organización Internacional para las Migraciones (O.I.M.);
- ll) Pichincha Runacunapac Riccharimui.

**B. Recursos de que dispone un individuo que afirma
que se han violado sus derechos y sistemas de
indemnización y rehabilitación**

1. Recursos en la Constitución Política vigente

a) Habeas corpus constitucional

53. El artículo 19, numeral 17, literal j) de la Constitución Política vigente, prescribe:

"Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad puede acogerse al habeas corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde o Presidente del Concejo bajo cuya jurisdicción se encuentre o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa por los encargados del centro de rehabilitación social o lugar de detención.

Instruido de los antecedentes, el Alcalde o Presidente del Concejo dispondrá la inmediata libertad del reclamante, si el detenido no fuere presentado o si no exhibiere la orden, o si ésta no cumpliera los requisitos legales, o si se hubieren cometido vicios de procedimiento o en fin, si se hubiere justificado el fundamento del recurso. El funcionario o empleado que no acatare la orden será destituido inmediatamente de su cargo o empleo sin más trámite por el Alcalde o Presidente del Concejo, quien comunicará la destitución a la Contraloría y a la autoridad que deba nombrar su reemplazo.

El empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al detenido, puede reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro de ocho días de notificado de su destitución."

2. Recursos en la legislación procesal penal

a) Recurso de amparo (habeas corpus judicial)

54. El artículo 458 del Código de Procedimiento Penal señala:

"Cualquier encausado que con infracción de los preceptos constantes en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano se encuentre detenido, podrá acudir en demanda de su libertad al Juez Superior de aquel que hubiere dispuesto la privación de ella.

Cuando la queja se presente ante las Cortes Suprema o Superiores la conocerá el Presidente del Tribunal.

Cuando la privación de la libertad hubiere sido ordenada por los intendentes, los subintendentes, los comisarios de policía o los tenientes políticos, la queja se presentará ante cualquiera de los jueces penales del respectivo territorio.

La petición se formulará por escrito.

El Juez que deba conocer la solicitud ordenará inmediatamente después de recibida ésta la presentación del detenido y oír su exposición, haciéndola constar en una acta que será suscrita por el Juez, el Secretario y el quejoso, o por un testigo en lugar de este último, si no supiere firmar. Con tal exposición el Juez pedirá todos los datos que estime necesarios para formar su criterio y asegurar la legalidad de su fallo, y dentro de 48 horas resolverá lo que estimare legal. La resolución constará a continuación del acta de que habla el inciso anterior.

De haber sido cierta la privación ilegal de la libertad, el Juez dispondrá que el detenido sea inmediatamente excarcelado. Las autoridades y empleados encargados de la custodia del detenido obedecerán la orden, necesariamente.

El Juez que hubiera mandado detener ilegalmente a un individuo será destituido de su empleo, en caso de malicia evidente, a cuyo efecto, el superior que conoció de la petición o queja a que se refiere el presente artículo dará inmediato aviso a la autoridad o corporación nominadora para la remoción, que deberá cumplirse forzosamente, so pena de incurrir en delito de rebelión.

En la misma pena de destitución del cargo incurrirá el superior que hiciere uso indebido de la facultad que concede este artículo.

Serán también destituidos los encargados de la vigilancia del detenido que no obedecieren la orden de que trata el inciso quinto de este artículo.

Lo dicho en los incisos anteriores se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal a que diere lugar la detención arbitraria.

Las partes afectadas tendrán derecho a proponer la acción de daños y perjuicios contra los jueces y magistrados penales, en los mismos casos en que procede en materia civil."

55. El artículo 459 del Código de Procedimiento Penal establece que "las partes tendrán derecho a proponer la acción de indemnización de daños y perjuicios contra los jueces y magistrados penales, en los mismos casos en que procede en materia civil".

b) Recurso de apelación

56. El artículo 348 del Código de Procedimiento Penal señala:

"Procede el recurso de apelación cuando alguna de las partes lo interpusiere respecto de las siguientes providencias:

1. de los autos de sobreseimiento provisional o definitivo;
2. del auto de apertura del plenario;
3. de los autos de inhibición y de prescripción que ponen fin al proceso;
4. de las sentencias absolutorias o condenatorias que se dicten en los procesos que se sustancien en procedimientos especiales; y,
5. de la sentencias que se dicten en los procesos que, por liquidación y pago de daños y perjuicios, se sustancien ante los jueces o tribunales penales."

c) Recurso de nulidad

57. El artículo 360 del Código de Procedimiento Penal prescribe:

"Habrá lugar al recurso de nulidad en los casos siguientes:

1. cuando el juez o el Tribunal Penal hubiese actuado sin competencia;
2. cuando no se haya citado el auto cabeza de proceso o la acusación particular, al sindicado o al defensor de oficio;
3. cuando no se ha notificado a las partes el nombramiento de peritos, fuera de los casos en que la ley permite esta omisión;
4. cuando no se hubiera notificado la sentencia a una de las partes;
5. cuando el Tribunal Penal no se hubiera integrado en la forma legal;
6. cuando en la sustanciación de la audiencia del Tribunal Penal se ha violado el procedimiento previsto en la legislación procesal penal;

7. cuando no se ha notificado la reunión del Tribunal Penal en el plazo legal;
8. cuando se ha integrado el Tribunal con uno o más miembros legalmente recusados;
9. cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos por la ley; y
10. cuando en la sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite previsto en la ley."

d) Recurso de casación

58. El artículo 373 del Código de Procedimiento Penal prescribe:

"El recurso de casación será procedente para ante la Corte Suprema de Justicia cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla interpretado erróneamente."

e) Recurso de revisión

59. El artículo 385 del Código de Procedimiento Penal señala:

"Habrá lugar al recurso de revisión de toda sentencia condenatoria, el que se interpondrá para ante la Corte Suprema de Justicia, en los casos siguientes:

1. si se comprueba la existencia o la identidad de la persona que se creía muerta;
2. si, por error, se hubiera condenado a un inocente, en lugar del culpable;
3. si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito, contra diversas personas; sentencias que por ser contradictorias, revelan que una de ellas, necesariamente es errada;
4. si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos, o de informes periciales manifiestamente maliciosos o errados;
5. cuando no se hubiera comprobado conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia;
6. si una persona ha sido sentenciada a reclusión cuando según la ley la sentencia debía ser solamente de prisión; y,
7. cuando en forma manifiesta se demostrare con nuevos que se le ha imputado."

f) Recurso de hecho

60. El artículo 395 del Código de Procedimiento Penal prescribe:

"El recurso de hecho se concederá cuando el Juez o Tribunal Penal hubieran negado los recursos oportunamente interpuestos y que se encuentran expresamente señalados en la legislación procesal penal.

Este recurso se interpondrá ante el Juez o Tribunal que hubiera negado el recurso oportunamente interpuesto dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto que lo niega.

Interpuesto el recurso, el Juez o Tribunal, sin ningún trámite, remitirá el proceso a la Corte Superior, quien admitirá o denegará dicho recurso."

3. Sistemas de indemnización

61. El artículo 20 de la Constitución Política vigente prescribe:

"El Estado y más entidades del sector público estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que le irrogaren como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos.

Las entidades antes mencionadas, en tales casos, tendrán derecho a repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hubieren causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los jueces competentes."

62. El artículo 21 de la Ley suprema establece:

"Cuando una sentencia condenatoria haya sido reformada o revocada por efecto del recurso de revisión, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, será rehabilitada e indemnizada por el Estado conforme a la ley."

63. Esta disposición constitucional se encuentra recogida en el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal que dispone:

"Cuando la Corte Suprema de Justicia aceptando el recurso de revisión, revoque o reforme la sentencia recurrida, el injustamente condenado tendrá derecho a una indemnización equivalente al duplo de los ingresos percibidos según su declaración de impuesto a la renta, correspondiente al año inmediatamente anterior a su privación de la libertad y en proporción al tiempo que hubiese permanecido preso.

Si no existiera declaración de impuesto a la renta, la indemnización será igual al duplo del salario mínimo vital del trabajador en general, por todo el tiempo que el condenado hubiera permanecido privado de su libertad."

64. Los condenados por sentencia ejecutoriada, pagarán los daños y perjuicios ocasionados a la víctima, en forma solidaria (artículo 329 del Código de Procedimiento Penal).

65. Por otra parte, el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución señala:

"El retardo injustificado en la administración de justicia es reprimido por la ley y, en caso de reincidencia, constituye motivo para la destitución del magistrado o juez quien, además, es responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas."

66. Adicionalmente, toda persona disfruta de los derechos reconocidos por los acuerdos, pactos y convenios de los que forma parte el Ecuador y, en consecuencia, en caso de formular un reclamo puede acudir, indistintamente, a los tribunales u órganos internos: Congreso Nacional, Tribunal de Garantías Constitucionales, Función Jurisdiccional, municipalidades; y a los organismos internacionales competentes: Comité de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y Comité contra la Tortura.

C. Protección de los derechos contemplados en los diversos instrumentos de derechos humanos

67. El artículo 44 de la Constitución Política vigente señala:

"El Estado garantiza a todos los individuos, hombres o mujeres que se hallen sujetos a su jurisdicción, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, enunciados en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes."

68. Por otra parte, dentro de las atribuciones y deberes del Presidente de la República, el literal n) del artículo 78 de la Carta Fundamental determina:

"Declarar el estado de emergencia nacional y asumir las siguientes atribuciones o algunas de ellas, en caso de inminente agresión externa, de guerra internacional o de grave conmoción o catástrofe interna, notificando al Congreso Nacional, si estuviere reunido o al Tribunal de Garantías Constitucionales:

...

6. Suspender la vigencia de las garantías constitucionales; pero en ningún caso puede decretar la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la vida y la integridad personal; o, la expatriación de un ecuatoriano, ni disponer el confinamiento fuera de las capitales de provincia ni a distinta región de la que viviere el afectado."

De la transcripción anterior se desprende que en ninguna circunstancia excepcional el Presidente de la República, ni ninguna otra autoridad, pueden suspender el derecho a la inviolabilidad de la vida o a la integridad personal.

69. De otra parte y como medida de equilibrio entre las funciones del Estado, si el Congreso Nacional o, en su receso, el Tribunal de Garantías Constitucionales consideran que el Presidente de la República se ha excedido en sus atribuciones al decretar el estado de emergencia o al prolongarlo indebidamente, pueden revocar dicha declaratoria inmediatamente y excitar al Presidente con tal propósito.

D. Forma en que los instrumentos de derechos humanos pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional

70. La Constitución Política vigente, en su artículo 137, consagra:

"La Constitución es la ley suprema del Estado. Las normas secundarias y las demás de menor jerarquía deben mantener conformidad con los preceptos constitucionales. No tienen valor alguno las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones y tratados o acuerdos internacionales que, de cualquier modo, estuvieren en contradicción con la Constitución o alteren sus prescripciones."

71. El artículo 78 de la misma Carta Política que trata sobre las atribuciones y deberes del Presidente de la República, en su literal f), manifiesta:

"Determinar la política exterior y dirigir las relaciones internacionales, celebrar tratados y demás convenios internacionales de conformidad con la Constitución y leyes; ratificarlos previa aprobación del Congreso Nacional; canjear o depositar, en su caso, las respectivas cartas de ratificación."

72. Una vez suscrito el convenio internacional, el Congreso Nacional deberá proceder a aprobarlo o desaprobarlo. Así, el artículo 59, literal h) de la Constitución dispone:

"El Congreso Nacional se reúne en pleno, sin necesidad de convocatoria, en Quito, el 10 de agosto de cada año y sesiona durante 60 días improrrogables, para conocer exclusivamente de los siguientes asuntos:

...

h) Aprobar o desaprobar los tratados públicos y demás convenciones internacionales."

73. Aprobado por el Congreso, corresponderá al Presidente de la República su ratificación y promulgación en el Registro Oficial, de conformidad con lo que disponen los incisos 1) y 2) del artículo 5 del Código Civil:

"La Ley no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República y después de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella.

La promulgación de las leyes y decretos deberá hacerse en el Registro Oficial, y la fecha de promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho Registro."

E. Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos pueden ser invocadas ante los tribunales judiciales o las autoridades administrativas, o ser aplicadas directamente por ellos o deben transformarse en derecho interno o en reglamentaciones administrativas antes de que puedan ser aplicadas por las autoridades competentes?

74. Una vez que los acuerdos o convenios internacionales han sido aprobados por el Congreso Nacional y ratificados por el Ejecutivo, adquieren plena validez y pueden ser invocados por los particulares y aplicados por los jueces, tribunales y órganos administrativos competentes.

F. Institución u órgano nacional encargado de vigilar la aplicación de los derechos humanos

75. Dentro de las atribuciones que competen al Tribunal de Garantías Constitucionales, la actual Constitución Política, en su artículo 141, establece:

"1. Velar por el cumplimiento de la Constitución, para lo cual excitará a las autoridades y demás funcionarios de la Administración pública;

...

3. Conocer de las quejas que formule cualquier persona natural o jurídica por quebrantamiento de la Constitución que atente contra los derechos y libertades garantizados por ella y, de encontrarlas fundadas, observar a la autoridad y organismo respectivo..."

76. Adicionalmente, hay que destacar que el Congreso Nacional ha organizado una Comisión Especial de Derechos Humanos, integrada por legisladores que representan todas las tendencias políticas.

IV. INFORMACION Y PUBLICIDAD

77. El Gobierno nacional ha llevado a cabo programas de capacitación y enseñanza de derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En tal sentido, en marzo de 1990, se organizó un seminario de "Formación de derechos humanos" para 150 miembros de la policía nacional. En el evento se abordaron temas generales de derechos humanos; los efectos de los tratados internacionales relativos a este tópico y el papel de la policía en su protección. Existe un convenio de cooperación entre la Cruz Roja y el Ministerio de Defensa Nacional que compromete a las partes a difundir, entre el personal castrense, los instrumentos relativos a los derechos humanos de los cuales forma parte el país y efectuar conferencias y seminarios sobre derecho internacional humanitario. Asimismo, la Academia Diplomática del Ecuador, en colaboración con el Comité de la Cruz Roja, ha organizado seminarios sobre estos temas con la participación de funcionarios de las fuerzas armadas y de la policía nacional.

78. La preocupación por el tema de los derechos humanos se ha hecho sentir a nivel de la propia organización administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha establecido una Dirección General de Derechos Humanos y Refugiados, con el propósito de coordinar toda actividad sobre esta materia.

79. De conformidad con el Plan Operativo Anual 1991, la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería en coordinación con organismos internacionales y entidades nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, ha llevado adelante un programa de capacitación sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, dirigido a varios sectores de la sociedad. El Plan Operativo Anual 1992, cuya copia se adjunta*, incorpora algunas otras actividades de difusión y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

80. Se debe mencionar también la importante labor que en este sentido efectúa la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) en estrecho contacto con el Gobierno del Ecuador. Dentro de este contexto se han celebrado, hasta el momento, tres seminarios sobre los siguientes temas:

- a) "I Seminario de Educación en Derechos Humanos a Jueces y Magistrados", del 27 al 31 de mayo de 1991;
- b) "La Administración de Justicia y el Respeto de los Derechos Humanos en Ecuador", Quito, del 9 al 12 de septiembre de 1991; y
- c) "Los Derechos Humanos y la Administración de Justicia en Ecuador", Cuenca, del 7 al 9 de octubre de 1991.

81. El Ecuador brinda especial atención a las actividades de difusión y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y ha manifestado su total disposición de continuar colaborando en la promoción de los derechos humanos con los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas y recibir la asistencia adecuada para este propósito.

* Esos documentos presentados por el Gobierno del Ecuador en español, pueden ser consultados en el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Anexo

LISTA DE FUENTES DE INFORMACION

- V Censo de población y IV de vivienda 1990. Resultados definitivos. Publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)*.
- Ecuador. Datos e indicadores básicos 1991. Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)*.
- Indicadores económicos globales. CONADE. Informativo para consulta y divulgación, 1990*.
- Indicadores sociales. CONADE. Informativo para consulta y divulgación, 1990*.
- Información sobre indicadores económicos y sociales. Ministerio de Relaciones Exteriores*.
- Luis Valencia Rodríguez. "Visión del Ecuador", 1992*.
- "Ecuador", Edit. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1982*.
- Agustín Cueva, "El proceso de dominación política en el Ecuador".
- Almanaque mundial 1990.
- Constitución Política del Ecuador.
- Información sobre comisiones legislativas. Congreso Nacional.
- Guía de ONG de derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
- Manual básico de los derechos humanos. Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC).
- Directorio de derechos humanos en América Latina. Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).
- Directorio de organizaciones de derechos humanos. Ecuador (1990). Human Rights Internet. Harvard Law School.
- Código de Procedimiento Penal ecuatoriano.
- Código Civil ecuatoriano.

* Esos siete documentos han sido presentados y pueden ser consultados en el Centro de Derechos Humanos.

Plan Operativo Anual 1991. Dirección General de Derechos Humanos y Refugiados.
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Plan Operativo Anual 1992. Dirección General de Derechos Humanos y Refugiados.
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Información sobre seminarios celebrados. Asociación Latinoamericana para los
Derechos Humanos (ALDHU).
